



Conselleria de Bienestar Social
Hble. Sr. Conseller
Paseo de la Alameda, 16
VALENCIA - 46010

=====
Ref. Queja nº 082867
=====

Asunto: Atención a la situación de dependencia

Hble. Sr.:

Acuso recibo a su escrito en relación con la queja de referencia, iniciada a instancia de D^a. (...) sobre el asunto mencionado. De dicho escrito, de la documentación aportada por la interesada y de todo lo actuado se deduce que el 2 de julio de 2007 se solicitó la valoración y ayudas, a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley de la Dependencia) para sí misma.

Según escrito de 29 de agosto de 2008 del Área de Coordinación de la Conselleria de Bienestar Social dirigido a D^a. (...), referenciado bajo el asunto: información sobre situación del expediente se dice textualmente:

“(...)Nos ponemos en contacto con usted para informarle que del estudio de la documentación que obra en su expediente sobre reconocimiento de la situación de dependencia y tras una primera valoración , se detecta que no se encuentra usted en un grado y nivel de dependencia de los que la ley ampara este momento.

No obstante, cuando se resuelva de forma expresa sobre su situación, desde esta Conselleria de Bienestar Social se le remitirá la oportuna Resolución de Reconocimiento de Dependencia, si es el caso. (...)”

Con tales antecedentes procedemos a resolver el expediente.

La Ley regula escasamente el procedimiento para obtener las ayudas y prestaciones (art. 28) refiriéndose a la forma de iniciarlo, a la valoración, a la elaboración del programa individual de atención como instrumento que definirá las prestaciones adecuadas a cada caso. El Consell aprobó el Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes. Esquemáticamente, el procedimiento consiste en: solicitud, subsanación de la misma, valoración en domicilio, informe social, elaboración del programa individual de atención, negociación del mismo y resolución. El plazo máximo para resolver es de seis meses (art. 10.2 del Decreto) y los efectos

económicos de la resolución favorable lo son desde el día siguiente a la presentación de la solicitud (arts. 10.4 del Decreto).

Dicho Decreto en su art. 2 al referirse al régimen jurídico del mismo remite a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y esta Ley dispone que en los procedimientos iniciados a instancia de parte se deberá dictar resolución y notificarla a los interesados (art. 89). Por otra parte los restantes modos de terminación del procedimiento son el desistimiento, la renuncia y la caducidad (arts. 90 y 91).

Además, la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva la inobservancia de la normativa aplicable al respecto. En efecto, se vulnera lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el plazo máximo en el que debe notificarse por la Administración la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

El artículo 47 de la Ley 30/1992 establece que la observancia de los plazos es obligatoria y su artículo 41, igualmente, obliga a la adopción de las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anomalía en la tramitación de los procedimientos. Con independencia de que el artículo 43.1 establece los efectos de la falta de resolución expresa (silencio administrativo), la Administración tiene obligación expresa de resolver, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 30/1992.

Por tanto nos es admisible dejar en una especie de “vía muerta” los expedientes respecto de los que se presume, concepto, por cierto ajurídico, que no gozaran de ayudas y prestaciones en este momento. El expediente debe tramitarse en todas sus fases y en los plazos previstos y si al final resulta que el interesado no es acreedor de prestaciones en este momento, declararlo así y concederlas cuando corresponda.

Es congruente con lo anterior el propio Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, cuando en su art. 10.5, referido a la resolución y no a ninguna otra fase procedimental anterior, dice:” *Si la persona beneficiaria hubiera sido reconocida como dependiente en un grado y nivel, cuya efectividad no hubiera entrado en vigor, según el calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el derecho a las prestaciones a que pudiera tener derecho se hará efectivo a partir del día 1 de enero del año en el que la ley tendrá eficacia para ese grado y nivel.*”

Por tanto, le RECOMIENDO que proceda, a la mayor brevedad posible, a resolver el expediente a que se refiere la presente resolución, reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención correspondan.

Le agradecemos nos remita en el plazo de un mes el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación o no de la recomendación que se realiza o, en su caso, las razones que estime para no aceptarla.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página Web de la Institución.

Atentamente la saluda,

Carlos Morenilla Jiménez
Síndic de Greuges e.f. de la Comunitat Valenciana